

# América Latina: sin sorpresas. Democracias inestables a finales del siglo

Beatriz Stolowicz W.\*

## Entre la euforia y las sorpresas

Las formas de ver y analizar los problemas de la democracia son tan variadas y con lógicas tan diversas que a veces pareciera que es un tema inasible y, más aún, meramente ideológico, esto es, con tantas verdades como opinantes. El espectro de perspectivas abarca desde las más casuísticas a las más abstractas y sus confrontaciones en los debates parecen más bien diálogos de sordos. Y da la impresión que se ha avanzado tan poco en una capacidad predictiva respecto a la democracia en América Latina que la realidad parece siempre prodigiosa en sorpresas.

No es mi objetivo detenerme en este trabajo en el señalamiento de todas las perspectivas en juego. Sólo mencionaré algunas de las más frecuentes y que ilustran las lagunas explicativas que suelen haber sobre el tema.

Una de ellas plantea la democracia como modelo abstracto de relaciones jurídico-institucionales entre sujetos de derecho. Esta es una perspectiva que da pie a múltiples tipologías y clasificaciones de la democracia y que es muy cara a un medio académico que rechaza contaminaciones con la realidad concreta. Construye lógicas expositivas impolutas, pero se desmorona cuando se le introducen las variables de los sujetos sociales concretos, con los intereses antagónicos que poseen y la fuerza política con que los representan y realizan. Los problemas de la democracia son casi técnicos y para resolverlos basta la voluntad de los "actores"

para sentarse a discutirlos. Aunque deficientes al contrastarlos con la realidad, son análisis que fascinan por su lógica circular. No tienen necesariamente intencionalidades perversas sino son efecto de prácticas academicistas.

En otro polo encontramos las perspectivas de los sujetos políticos, en muchos casos determinadas por el "realismo", esto es, por la valoración de la democracia desde las situaciones concretas de la correlación de fuerzas en torno a fenómenos también concretos, donde el punto de referencia es "lo posible". Un posibilismo que posterga la proyección futura de "lo deseable" y lo que ello implica para los distintos sujetos políticos involucrados. Por ello su capacidad de predicción es limitada.

Existen otras posiciones que tienen una intencionalidad política precisa pero que la ocultan tras abstracciones de supuesta neutralidad: un posibilismo político siempre vinculado a la oportunidad (¿a ello se le llamará oportunismo?) al que se le da un recubrimiento "científico" que lo legitime, creando o adaptando modelos para la justificación *universal* de posiciones muy específicas en la escena política. Sus representantes denominan esta alquimia como "renovación". Los "renovados" suelen considerar que democracia es su propia inserción privilegiada en el sistema político.

Es justo decir que también existen visiones sobre la democracia que conjugan lo posible con lo deseable y que entienden la táctica y la estrategia políticas como una unidad dialéctica. Lamentablemente, hoy en día no son las mayoritarias en América Latina.

Por el momento no me detengo a realizar la sociología del fenómeno para determinar el *horizonte de visibilidad* de dichas posiciones, en el sentido que apuntaba René Zavaleta; entre otras



razones, porque todas estas perspectivas se encuentran tanto en la izquierda como en el centro políticos; la derecha es más transparente en su instrumentalización de la democracia, aunque posee sectores "renovados" que logran una mimetización que les facilita entendimientos con otros "renovados". Desenredar esta madeja es materia de un trabajo distinto al que propongo aquí.

Otro aspecto que ha dificultado avanzar en el debate sobre la democracia es que a falta de rigores teóricos y explicativos, las referencias sobre el tema, especialmente en los últimos diez años, han contenido una carga anímica cambiante según las expectativas y realizaciones que han tenido lugar: euforia, desánimo, preocupación, escepticismo y hasta indiferencia.

Se puede tomar el rumbo de los ánimos rastreando los temas y problemas que ocuparon la atención, por ejemplo, los que se trataron en los tres últimos congresos latinoamericanos de sociología entre 1986 y 1991.

En Río de Janeiro, en 1986, era la euforia sobre la reconquista de libertades públicas y mecanismos de representación. Las transiciones entre dictadura y democracia habían culminado formalmente con elecciones en la mayoría de los países (exceptuando Chile y Paraguay). Debo decir que la euforia se justificaba después de periodos tan largos de represión; pero en ciertas posiciones había cordedad de miras.

En 1988, en Montevideo, las opiniones se dividían de acuerdo a la geografía política: los temas de 1986 seguían en primer orden en los países que aún estaban bajo dictaduras o regímenes de representación insuficiente; en cambio, los que habían transitado los caminos de mayor libertad reivindicaban que la nueva etapa de respeto por la vida de los ciudadanos contemplara su derecho a comer, como mortales que realmente son. Para los intelectuales orgánicos de los círculos dominantes (tradicionales o "renovados"), esa parte de las aspiraciones sociales mayoritarias —no demasiado identificadas con sus propios planes económicos— debía ser anatemizada por desestabilizadora y antidemocrática. Debe decirse, también, que en 1988 los temas sobre fuerzas armadas, seguridad nacional y derechos humanos tenían una alta representación que correspondía a los enfrentamientos nacionales en torno a los procesos judiciales contra militares violadores de derechos humanos durante las dictaduras y las leyes de amnistía que se fueron imponiendo. Esto daba cuenta de que en la relación civiles-militares las transiciones recién estaban culminando.

En 1991, en La Habana, los temas volvieron a mostrar desplazamientos no obstante no mantenerse la proporcionalidad en la representación de tendencias analíticas, dada la notoria ausencia de muchos de los intelectuales "renovados". Las pre-

ferencias se dirigieron a las teorías generales y a la epistemología, pero sin mucha conexión con los debates sobre la realidad latinoamericana; a las discusiones sobre el socialismo (se estaba en un momento álgido de su crisis en Europa); a rescatar experiencias puntuales sobre el acontecer político en uno u otro país; algo sobre nuestro grado de posmodernidad. Sobre la democracia en América Latina se discutió mucho menos y casi nada sobre seguridad nacional, guerra de baja intensidad o similares. En general, el tema que nos ocupa tuvo un bajo perfil de problematización en toda la región, como si lo alcanzado hubiera tocado techo y sólo cabría la conformidad.

A comienzos de esta última década del siglo, en este ambiente descrito proliferó la adscripción a las euforias de dirigentes y gobiernos<sup>1</sup> sobre el cuadro político en América Latina: Chile, Paraguay, Haití se habían incorporado al "concierto de naciones democráticas". Nicaragua, mostraba en febrero de 1990 que el triunfo de la democracia occidental implicaba abandonar el proyecto sandinista. También Panamá volvía a la democracia desde una base militar norteamericana, sobre los cadáveres bombardeados en "El Chorrillo". Sólo Cuba seguía irredimiblemente pecadora.

La arrolladora democracia no se saltó a Europa del Este ni dejó en pie el muro de Berlín.<sup>2</sup>

Los "enclaves autoritarios" se iban absorbiendo, pues las amistías "habían integrado a las fuerzas armadas a la sociedad".

Los temas macroeconómicos fueron concentrando la atención al tiempo que los sectores dominantes incrementaban la iniciativa ideológica, imponiendo los temas y los términos del debate: reconversión productiva y tecnológica, integración económica, ajustes fiscales y privatizaciones, eficiencia, etcétera.

Pero 1992 vino a sacudir las modorras y a recordar las limitaciones de la democracia. Sorpresas. En escasos meses, la *idílica* situación de América Latina descubre su verdadero rostro: golpe de Estado en Haití contra el primer gobierno verdaderamente democrático (30 de septiem-

<sup>1</sup> El presidente argentino Carlos Menem escribía, todavía en este último abril: "El mundo de hoy, a diez años de la guerra de las Malvinas se asocia en espacios económicos integrados de manera vertiginosa y se democratiza sin pausa: más de dos mil millones de personas viven hoy en países democráticos, 35 por ciento de la población mundial habita en 1992 en naciones libres, realidad difícil de prever una década atrás." Véase diario *La República*, Montevideo, 6 de abril de 1992, p. 4.

<sup>2</sup> Cabría preguntarse si no ha habido, en lo que a las ciencias sociales se refiere, un consumo frívolo de los "datos" de la coyuntura, sustituyendo análisis por materia prima periodística. Tras la fascinación sobre la caída del muro de Berlín hoy se multiplican los análisis sobre la frustración alemana que se manifiesta en pujos neonazis, racistas y xenófobos. Un entusiasmo acrítico sobre la perestroika que orilló a muchos otrora stalinistas a un liberalismo ramplón, se contrasta con sorpresas frente al autoritarismo de Yeltsin y el drama cotidiano de la ex URSS.

bre de 1991);<sup>3</sup> intento de golpe de Estado en Venezuela (4 de febrero de 1992); autogolpe en Perú (5 de abril de 1992); cambios completos del gabinete ministerial en Brasil para evitar una crisis política; amenazas del presidente uruguayo de gobernar por decreto si no obtiene apoyo parlamentario; la ruptura y condicionado reinicio de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno colombianos;<sup>4</sup> las enormes dificultades por echar a andar la fase de "reconciliación" política en El Salvador, tras los acuerdos de paz firmados en México el 16 de enero de 1992; la crisis social y política permanente en Nicaragua; la democracia "ejemplar" de Costa Rica que debió recibir generosas donaciones de armamento represivo desde China y Alemania para combatir a la delincuencia; huelgas por doquier.<sup>5</sup>

El entorno político corresponde a un cuadro social, vastamente denunciado, pero del que siempre surgen nuevos indicadores. Los más espectaculares y vergonzantes como el cólera o los dos niños de la calle asesinados diariamente en promedio en Brasil por Escuadrones paramilitares por *perturbar el orden y la tranquilidad ciudadana*.<sup>6</sup> Otros menos notorios, pero tan reales y elocuentes como el hecho de que los niños latinoamericanos en edad preescolar están sufriendo retrasos graves en la talla promedio debido a la desnutrición crónica.<sup>7</sup> El año 1992 no parece ser propicio para celebraciones, del V Centenario y otras.

<sup>3</sup> Los demócratas suelen indignarse menos por el golpe de Haití porque a fin de cuentas allí se estaba intentando una democracia de participación popular directa. Haití pasó a un segundo plano aunque se denuncien 4 mil asesinatos desde el golpe contra Aristide.

<sup>4</sup> La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar exige considerar en las negociaciones de paz desarrolladas en Tlaxcala, México, los 60 asesinatos ocurridos en Colombia sólo en el mes de abril.

<sup>5</sup> En Colombia, los trabajadores de telecomunicaciones son violentamente desalojados por el ejército de las instalaciones que ocupaban contra la privatización de la empresa en abril de 1992; en los primeros cuatro meses de este año hubieron decenas de huelgas en Uruguay contra la política económica del gobierno; en Perú, maestros y médicos desarrollan numerosas medidas de lucha; la lista es enorme.

<sup>6</sup> El representante de UNICEF en Brasil, Agop Kayayan declara que "En Brasil, la violencia contra menores pasó a ser banal, y esos crímenes cotidianos anestesiaron a una parte considerable de la población, a la que ya no le importa el destino de los niños callejeros (...) la violencia contra los menores se agrava con la crisis económica y con la negativa de los países ricos y los bancos internacionales en reducir las tasas de interés de la deuda externa de los países en desarrollo". Véase diario *La Jornada*, México, 21 de abril de 1992, p. 27.

<sup>7</sup> Mientras el retraso grave en los países desarrollados se encuentra (según el patrón de referencia establecido por la Organización Mundial de la Salud) en el 2.3 por ciento de los niños hasta 5 años, en países de población tradicionalmente más alta por su origen étnico predominantemente caucásico (raza blanca) como Uruguay, el porcentaje de retraso grave de talla se eleva a casi el doble (4.1 por ciento), y en Buenos Aires, la capital de una dieta tradicionalmente sobrerrepresentada por las proteínas cárnicas, la cifra casi cuadruplica (8 por ciento). En otros países, como Ecuador y Bolivia, el retraso grave asciende a un 30 por ciento. Datos del Segundo Censo del Instituto Nacional de la Alimentación (INA) dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. La directora técnica del INA Lic. María Isabel Bove, señala

## Lágrimas de cocodrilo

Las consideraciones de la crisis económica como un detonante de la conflictividad sociopolítica y de la inestabilidad de la democracia latinoamericana han pasado a ocupar un lugar importante en los discursos oficiales nacionales y regionales. No obstante ello, los programas de reajuste neoliberal siguen avanzando, la deuda externa se sigue pagando y sigue creciendo, se rematan las riquezas nacionales con políticas de privatización en aras de supuestas políticas sociales que no resuelven mínimamente el deterioro del salario real, el que sigue siendo el rehén de las ventajas comparativas con el mercado capitalista mundial.

El ministro de Defensa venezolano Gral. Fernando Ochoa Antich declara dos meses después del intento de golpe de Estado que:

"la debilidad de los sistemas democráticos latinoamericanos tiene su origen en la crisis económica regional, la deuda externa y los esfuerzos de las naciones del área por cumplir con sus compromisos financieros internacionales (...)"<sup>8</sup>

Por su parte, el presidente hondureño Rafael Leonardo Callejas señala que:

"el pueblo reclama con justicia y razón (...), pero nuestras sociedades no les han dado vivienda, educación y salud (Los gobiernos) dan esperanzas para pasado mañana, mientras que el pueblo tiene hambre, necesita techo y salud hoy".<sup>9</sup>

En el reciente II Foro Euro-Latinoamericano en Lisboa, el Secretario General de la OEA Joao Baena Soares denuncia que:

"el actual enemigo de la democracia en Latinoamérica no tiene origen externo (y que) el descontento y la rebeldía que se alimentan con la pobreza son los mejores aliados de los enemigos de la democracia(...)"<sup>10</sup>

La derecha en América Latina se "horroriza", se "sorprende": la gobernabilidad es demasiado precaria. Carlos Andrés Pérez, después del intento de golpe de Estado se dispone, ahora sí, dice, a preocuparse por los problemas sociales de Venezuela. Como el aprendiz de brujo, pierde el control sobre

que los resultados "ratifican la correlación existente entre el retraso de talla, el índice de necesidades básicas insatisfechas y los indicadores de privación crítica". Véase semanario *Búsqueda*, Montevideo, año XXI, núm. 633, semana del 2 al 8 de abril de 1992, p. 16.

<sup>8</sup> Véanse declaraciones en diario *La Jornada*, México, 21 de abril de 1992, p. 27.

<sup>9</sup> Véase diario *La Jornada*, México, 30 de abril de 1992, p. 52.

<sup>10</sup> Véase nota en diario *La Jornada*, México, 30 de abril de 1992, p. 52.

las mismas fuerzas armadas (o por lo menos sobre un sector importante de ellas), que usó para reprimir sangrientamente las movilizaciones callejeras contrarias a su política económica.<sup>11</sup> Mario Vargas Llosa levanta su voz para criticar el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú. Pero Vargas Llosa olvida que tiene una deuda política con el presidente golpista: gracias a que Fujimori le ganó las elecciones e hizo plagio de la política de shock<sup>12</sup> que el candidato escritor proclamaba, pudo liberarle de ser él quien cargara con las culpas (por cierto, no olvidemos que el único mandatario latinoamericano que llegó a Caracas a brindar su solidaridad a Carlos Andrés Pérez en los días del intento del golpe, fue precisamente Alberto Fujimori).

### Las trampas del debate

La crisis política que recorre América Latina no surgió de la nada, ni estaba hibernando. Pero como nunca había una suerte de esquizofrenia: la realidad indicaba una situación volcánica y las ciencias sociales tañían liras. Para que ello ocurriera convergieron distintas situaciones: el hecho objetivo de que la reconquista de libertades políticas era demasiado importante como para que no pesara anímicamente (el terror no es nunca gratuito y es absolutamente racional como política) un *chantaje democrático* desde las fuerzas represivas mismas; un ambiente internacional proclive a sobredimensionar la democracia política sobre cualquier otra consideración social; las dificultades de las organizaciones populares que aún no se recuperaban de sus heridas orgánicas y que adicionaban las heridas ideológicas de la crisis del socialismo, rompiéndose certezas y en un estado de cuasi-inmovilidad positiva; una combinación perversa entre la ofensiva ideológica de la derecha y la crisis de las ciencias sociales latinoamericanas. Una coyuntura de notable confusión.

Planteadas así las cosas, el debate sobre la democracia enfrentó a quienes hacían caso omiso de los contenidos sociales de la democracia para definirla exclusivamente en términos de régimen político (elecciones periódicas) y quienes reivindicaban a la democracia como expresión de la voluntad de las mayorías, que no casualmente, hoy en América Latina se condensa en demandas de carácter social o como las llaman algunos peyorativamente, corporativas.

La trampa del debate provino de imputársele a los defensores de la democracia con contenido social que desechan el valor de la formalidad demo-

crática, como si tras su interpelación a la democracia *real* de la región ocultaran su rechazo a la pluralidad, la tolerancia, el respeto de las libertades, etcétera. Cinismo.<sup>13</sup> Los defensores de la democracia de hambre versus los antidemocráticos defensores de la vida, de la participación social.

Demasiado poco tiempo pasó para que se observara que el régimen político en tanto relaciones institucionales no existe al margen de las relaciones sociales concretas. Que no puede concebirse la democracia con mayorías marginadas de los beneficios de su trabajo y de la riqueza nacional, marginadas de las decisiones nacionales sobre el destino de los bienes del país, e incluso, marginadas de mecanismos reales de elección de sus representantes políticos, porque los sistemas político-electorales de la región distan mucho de garantizarlo.

Y ello no implica, de ningún modo, alegrarse por los recientes acontecimientos de fracturas democráticas en la región. No han sido los pueblos latinoamericanos destinatarios pasivos de espacios democráticos que no valoren lo conquistado. Se trata de tener un poco de memoria histórica para saber que todos los avances democráticos en América Latina (tanto en el plano social como en el estrictamente político) fueron fruto de luchas populares con altos costos humanos. Así como las redemocratizaciones de la década de los 80 tuvieron como eje la resistencia popular, de la cual se beneficiaron sectores políticos no populares que negociaron su inserción privilegiada en el régimen democrático, aun cuando fueron tímidos opositores a las dictaduras; y otros, que sí participaron de la resistencia, pero que a la hora de negociar la transición a la democracia, privilegiaron su propia inserción en el régimen por sobre la representación política de los sectores postergados económica, social y políticamente y abandonaron su identificación con ellos.

En ambos casos, su fundamentación teórica sobre el fenómeno democrático asume *lo político* como absolutamente autónomo de lo *social*, ide-

<sup>13</sup> Cinismo hay para regalar. Agustín Edwards, director del diario *El Mercurio* de Chile, iniciador del golpe y defensor de la dictadura de Pinochet, promueve la creación de la Fundación Paz Ciudadana, "contra la violencia". Su directorio cuenta con personalidades como Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda y del Interior del gobierno militar y actual presidente del Instituto Libertad y Desarrollo (derecha pinochevista) quien afirma "Yo no he tenido ningún caso directamente vinculado a la violencia y el terrorismo. Sí me tocó durante mi gestión en el Ministerio del Interior. Viví muy de cerca la realidad de los movimientos terroristas, de acciones violentistas que alteraban la vida de la sociedad". Nótese donde radicaba la violencia en la vida chilena durante la dictadura. También lo integra Sergio Bitar, ex ministro de minería de la Unidad Popular, preso y exiliado, hoy "socialista renovado" y secretario general del Partido por la Democracia (PPD), que integra la coalición de gobierno con la Democracia Cristiana, Juntos y ¡revueltos!. Véase "La paz ciudadana depende de cada uno", *El Mercurio Internacional*, Santiago de Chile, semana del 2 al 8 de abril de 1992, p. 6.

<sup>11</sup> En el "caracazo" del 27 de febrero de 1989, a dos semanas de asumir el presidente Pérez, la represión armada dejó 300 muertos.

<sup>12</sup> El salario mínimo en Perú es de 65 dólares. Véase revista *Quehacer*, Lima, núm. 75, marzo de 1992, p. 23.

logizando una justificación del capitalismo salvaje de nuestra región. Unos, por estar directamente vinculados al interés capitalista nacional y transnacional; otros, acomodándose pragmáticamente al mismo con una ceguera cómplice e interesada, renunciando a los riesgos que implica asumir el interés popular, en una región donde el autoritarismo es un recurso permanente para sofocarlo, estructuralmente tendencial, como decía Agustín Cueva.

### Un caso ilustrativo

Un trabajo de Manuel Antonio Garretón M., "La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución",<sup>14</sup> es bastante sintomático de lo que venimos anotando. Leyéndolo con atención se percibe un contrapunto en el que el autor se enfrenta a sí mismo, desde luego sin proponérselo. Su andamiaje conceptual sobre la democracia no se verifica en el balance sobre el primer año de ésta en Chile, aunque las razones de tal desajuste son achacadas a la realidad. Sólo me detendré en algunos puntos aunque debo decir que discrepo en muchos otros que por el momento no cabe tratar aquí.

El origen conceptual de su argumentación es el de la democracia como fenómeno exclusivamente político y con absoluta autonomía respecto a intereses de clase o a proyectos societales. Para Garretón la democracia es sólo un régimen político

"basado en los principios e instituciones que consagran la soberanía popular, la elección de los gobernantes y autoridades efectivos por voto universal, la vigencia de los derechos humanos y libertades públicas, la separación de poderes, el pluralismo político y la alternancia en el poder" (p. 113).

Los problemas de democracia social (menor desigualdad, etcétera) a los que él denomina de "democratización social" y que sin demasiada convicción vincula a la estabilidad de la democracia política, corresponden —afirma— a momentos y circunstancias distintas de la democratización política, como etapas sucesivas y bien diferenciadas. La condición de que se llegue a esa segunda fase es

que los actores sociopolíticos lo deseen. Si no, de todos modos hay democracia y hasta gobernabilidad que, a mi juicio, es su principal inquietud. Así, los factores de consolidación democrática, según Garretón

"están vinculadas tanto a la superación de estos enclaves [autoritarios] como a la deseabilidad o voluntad democrática por parte de los actores sociales significativos, lo que en estos países está vinculado, hipotéticamente, a los procesos de democratización social. Ello remite al problema de los actores sociopolíticos capaces de combinar democratización política y democratización social" (p. 104), cursivas mías.

En la nota 20 se ratifica que los problemas de la democratización social y por ende de la estabilidad de la democracia nada tienen que ver con los "llamados 'factores estructurales' sino que estos factores se activan a través de las mediaciones de actores históricos y sociales, los cuales vinculan el problema del régimen al tema del cambio social" (p. 104). Quien lee el trabajo no llega a descubrir cuáles son para Garretón esos actores que combinarían democratización política y democratización social. Es una adivinanza, pues, con la desconexión absoluta entre sistemas de explotación y dominación en la argumentación de Garretón; la lectura daría, incluso, para llenar los espacios en blanco con lo que mejor se acomode. La sola formulación de la "deseabilidad" democrática como un acto de buena voluntad, es bastante tramposa como para sugerir que quienes han apostado y se han enriquecido con el "modelo" chileno, tal vez algún día estarían dispuestos a renunciar a él en aras de la democratización social. Quienes piensen que alineados con el modelo están sólo los "duros" (así denomina Garretón al pinochetismo ortodoxo), desconocerían Chile. El mismo centro político rescata muchas de sus bondades.

Por lo pronto, para Garretón, la herencia de la dictadura ha favorecido un régimen democrático gobernable, sin grandes conflictos pues aquella no ha dejado, dice, "una crisis económica aguda (...) que conmociona a toda la sociedad, ni una presión desmedida desde la sociedad por demandas no satisfechas" (p. 120). Para el autor un 40 por ciento de la población marginada económica y socialmente (obviamente eso no es "toda la sociedad") no es una economía en crisis porque los indicadores macroeconómicos exhibidos por los neoliberales así lo indican. En la valoración de las causas de *no desmedida* expresión de demandas sociales insatisfechas, poco importa si 16 años de represión destruyeron sus canales de expresión. Son detalles que no cuentan porque le han dado a la democracia política un "periodo de gracia", en palabras de Garretón.

<sup>14</sup> La versión que analizamos se publicó en el núm. 42 de otoño de 1991 de la revista *Estudios Públicos*, pp. 101-133, editada en Santiago de Chile por el Centro de Estudios Públicos. En una nota al pie de página se aclara que este mismo trabajo fue presentado en cinco eventos entre 1989 y 1990. Faltó allí agregar las conferencias en México en 1991 (hasta donde sé en la sede de FLACSO y en el Posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) y que antes, en 1988, presentó su parte medular en el XVII Congreso Latinoamericano de Sociología. Cuatro años con el mismo trabajo no parecería un nivel elevado de productividad.

Las urgencias por la democratización social, desde luego no son del mismo tenor para “toda la sociedad” y cuanto más se posterguen las demandas, se prolongará el “periodo de gracia” (bonita manera de ver la democracia de los que no están en el 40 por ciento de los que padecen miseria). Las prioridades de Garretón siguen estando en la gobernabilidad, que se incrementa la capacidad del gobierno de la mayoría política para “canalizar” la participación social (p. 126). Cuando mucho, propone reformas laborales que permitan una mayor participación y la asistencia estatal a los grupos de extrema pobreza (p. 130). Eso mismo piensan los organismos internacionales. Ni una vez en su trabajo menciona los salarios reales como instrumento de dignificación de los ciudadanos. En todo caso es un problema muy a futuro: “la dignidad, el respeto, el ser escuchados, la participación, el empleo, la movilidad social para los hijos, la salud (...) ninguno de ellos de alto costo desestabilizador” (p. 121, cursivas mías). En todo caso, será un problema para los gobernantes de las futuras generaciones; ahora se trata de canalizarlo adecuadamente de modo que no afecte al capital porque eso sí es desestabilizador.

Garretón reconoce, aunque sea una vez (p. 130) que la inexistencia de consenso sobre el modelo de desarrollo retrasa la democratización social. Pero ése no es un problema de clases sociales sino de falta “de claridad en las fuerzas políticas dirigentes” (p. 131). Compensándose las luces ¿se llegará al consenso, ya no de los dirigentes que coinciden más entre sí de lo que parece, sino entre éstos y los dirigidos?

No irritar, no afectar la gobernabilidad. La táctica del avestruz, que también defendió en el proceso de transición, rechazando incluir en las negociaciones entre la concertación de partidos y las fuerzas armadas temas a resolver “después”, como el de derechos humanos.

Pero la realidad es porfiada. No llegaron las estrategias globales consensuales,

“(…) se trasladó a la acción política el tipo de cálculo económico de incentivos, costo/beneficio, negociación a partir de una consideración estática de recursos y no de metas globales (p.127) (...) la llamada ‘democracia de los acuerdos o consensos’, como opuesta a la democracia por imposición de mayorías o minorías, no fue aplicada en su verdadera dimensión, (...) con lo que el debate propiamente político se reduce o empobrece y adquiere un carácter predominantemente táctico, (...) se fortalecen los actores e intereses corporativos” (p. 127).

Culpa de la realidad, no de la conceptualización. Incluso en temas de gran contenido ético-simbólico

como el de derechos humanos, Garretón reconoce una deseabilidad menor a la manifestada en los discursos preelectorales (pp.128-129) y que fue necesario que en Pisagua comenzaran a desenterrarse cadáveres de desaparecidos, para que cambiara la “correlación de fuerzas simbólicas a favor de soluciones más integrales y radicales” (p.128).

Encuentro contradicciones de fondo que me hacen dudar de la transparencia del análisis. En la p. 124 pareciera sugerirse una crítica a la democracia cupular como única forma de acción política; allí afirma, mostrando preocupación, que completar la democratización implica

“privilegiar necesariamente la política profesional —cupular—, la negociación, el papel de las élites y de la representación. Su prolongación o retardo implicaban la proyección de este tipo de política en el tiempo como la única acción colectiva” (p.124).

Pero en la página 132 Garretón dice:

“(…) la creación de la Concertación que resolvía un problema casi secular de la política chilena y el problema crucial de todos los procesos de democratización, obligaba a pensar que, desde ahora en adelante, nunca más un proyecto político debía pensarse desde la propia identidad para luego ‘pactar’ con otras entidades, sino que tal identidad y proyecto se debía definir ‘al interior’, ‘desde dentro’ de la coalición, como un énfasis en ciertos aspectos de un proyecto común que llevara a una competencia por el liderazgo sin poner en cuestión la existencia y proyección de tal alianza” (p. 132).

Según esto, los proyectos políticos no expresan a mayorías sino lo que decidan las dirigencias entre sí. La democracia se reduce a lo político y lo político a lo cupular. Pero también, que la competencia por el liderazgo, para quienes quieren garantizar su inserción privilegiada en el sistema político, requiere de la práctica del camaleón, sin identidades propias. ¿Es ese el precio de la “renovación”?

### **Democracias de derecha: una paradoja inestable**

Al hablar de democracias de derecha asumo un calificativo con connotación teórica. Investigando los elementos teóricos e ideológicos comunes a todo pensamiento de derecha (trátese de corrientes conservadoras o liberales, en sus versiones más clásicas o modernas), se observa que el eje que define todo su edificio conceptual como sus tradiciones prácticas es la desigualdad social como motor del dinamismo social, asumida como un rasgo “natural” de las sociedades y como un valor a

aceptar, justificar y promover, en aras del progreso de las sociedades.<sup>15</sup>

Las democracias latinoamericanas son de derecha porque funcionalizan la estrategia de dominación capitalista, profundamente excluyente. La paradoja está en que una formalidad institucional, supuestamente integrativa de la ciudadanía en su conjunto, viabiliza formas de profundización de la desigualdad social y política.

La estrategia dominante reduce el problema democrático exclusivamente al ámbito del escenario político (negociaciones políticas, elecciones periódicas, existencia de un parlamento). Espacios de indudable importancia social por los que sigue luchando. Pero en las actuales condiciones de dominación, las formas se han distanciado abismalmente de la esencia de la representación política democrática: la estabilidad del sistema depende de que las demandas sociales populares no se expresen y esta univocidad admitida niega la pluralidad de intereses que una democracia debe representar, con el agravante de que no encuentran cabida precisamente los mayoritarios. Son regímenes democráticos antidemocráticos. Se persigue la gobernabilidad de los sistemas mas no sobre consensos de mayorías desplazadas. Obsérvese cuántas decisiones parlamentarias favorecen a los explotados y cuántas al capital, nacional o transnacional.

Es bien sabido que los sistemas políticos funcionan fluidamente y aportan legitimidad a la dominación cuando la relación entre demandas de los gobernados y satisfacción de las mismas de parte de los gobernantes tiene correspondencia. Si éstos consideran, como ocurre actualmente, que las demandas de las mayorías populares atentan directamente contra el interés capitalista nacional e internacional y que por ello no son admisibles, el sistema político adolece de una inestabilidad extrema.

Evitar dicha inestabilidad, bajo estas reglas del juego, supone dos opciones: una, liquidar al sistema político mismo (opción que se desgastó en los periodos dictatoriales) y dos, evitar el "sobrecalentamiento" del sistema (Huntington) impidiendo que las demandas de los gobernados superen las ofertas de satisfacción de los gobernantes: gobernabilidad.

Como se ve, la gobernabilidad no implica que se solucionen los problemas reales sino que no se manifiesten y no se traduzcan en conflictos. Cuando esto no se logra, se habla de bloqueos al sistema. El desbloqueo es siempre responsabilidad popular renunciando a sus necesidades.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Esta conclusión surge de mi investigación "Los procesos de derechización en América Latina", realizada en el Área de Problemas de América Latina del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.

<sup>16</sup> Recientemente, el Partido por el Gobierno del Pueblo de Uruguay, de centro, aceptó integrarse al gabinete ministerial tras un ofrecimiento del presidente Lacalle. En su carta al presidente fechada el 14 de abril de 1992 señala que:

Esta forma de concebir la política tiene varias consecuencias. Por una parte, se admiten como pares en el sistema sólo a quienes acepten las reglas del juego dominante, y los que pretenden su integración con ese estatus de paridad deben ir abandonando programas alternativos, desperfilarse, caer sólo en el posibilismo político y en un pragmatismo que tiende a alejarlos incluso de sectores de su electorado. Esa actitud dual típica del centro político ha sido una de las causas de su debilitamiento y de la polarización de los escenarios políticos. Es también la reciente experiencia del M-19 en Colombia cuyo electorado disminuye vertiginosamente pues se siente frustrado.<sup>17</sup> Como contrapartida, los parlamentos y la llamada clase política se desprestigian ante la opinión popular en general. No debe sorprender, por lo tanto, que una parte de la opinión pública peruana haya apoyado las acciones de Fujimori contra los políticos. Hay que asumir que la autonomía de la esfera política no es absoluta aunque se proclame.

Las angustias por la sobrevivencia llegan a opacar la atención por los temas políticos. Si el descrédito hacia el sistema político origina indiferencia o pasividad, ello no afecta la gobernabilidad; por eso el abstencionismo electoral es una carta a favor suyo. Pero si la consecuencia es el descontento activo, la ingobernabilidad engendra riesgos de crisis del sistema político, con recurrencias autoritarias en las que las fuerzas armadas podrían volver a autoconcebirse como las únicas eficaces en el manejo estatal y en la garantía del orden interno. Ello ocurrió en Venezuela y en Perú. Al respecto, es elocuente la declaración solidaria de los "carapintadas" argentinos, coronel Mohamed Ali Sineidín y capitán

"El PGP está dispuesto a participar en el gobierno (...) porque siente la obligación de contribuir al desbloqueo de un sistema político sobre el que se aprecia —con real preocupación— un ascendente decrecimiento de la ciudadanía (...). Poniendo como condición: "La instrumentación de una política laboral tendiente a asegurar la estabilidad en el trabajo y el mantenimiento como mínimo del salario real. Política laboral que deberá inspirarse en el diálogo de las partes y la presencia del Estado". Y garantizando que se abstendría de "hacer una oposición sistemática" pero manteniendo su "libertad de acción conforme a su tradición constructiva y su programa partidario". No obstante la carencia de alianzas políticas del gobierno, éste no aceptó esas condiciones. La política económico-social no se negocia; la respuesta del gobierno, del 17 de abril, dice: "2) Política laboral. a) salarios privados: se hará efectiva la prescindencia del Estado. b) salarios públicos: transitoriamente no se vincularán con la inflación sino con las posibilidades reales del erario", y como cualquiera que no sea ingenuo puede prever, respecto a la oposición parlamentaria, la respuesta gubernamental indica que "la bancada debe abstenerse de actitudes (interpelaciones, censuras) y demás mecanismos (...) dirigidas contra el gobierno mientras lo integre (...). Véanse ambos documentos en semanario *Búsqüeda*, Montevideo, año XXI, núm. 627, semana del 20 al 26 de abril de 1992, pp. 6-7. El PGP tuvo que desestimar la propuesta.

<sup>17</sup> Véase "Una serie de errores políticos", entrevista al dirigente del M-19 Carlos Alonso Lucio, publicada en el semanario *Brecha*, año VII, núm. 325, 21 de febrero de 1992, p. 28.

Gustavo Breide Obeid, emitida el pasado 18 de abril desde el Campo de Prisioneros de Santa María Magdalena (Argentina):

“El abrumador respaldo popular a la actitud asumida por el presidente peruano nos muestra otra realidad: el agotamiento del sistema partidocrático. La democracia liberal ha hecho un culto de él, llevando lo que es un instrumento a un fin en sí mismo, y con ello ha perdido la República. Ya no se representa a nadie, ya no se vela por el Bien Común; sólo corrupción, complicidad y mediocridad. Rogamos a Dios y a su Santa Madre para que los nefastos inventos del capitalismo salvaje y las intromisiones de derechas e izquierdas cesen de agredir a los pueblos libres y soberanos”.<sup>18</sup> (Más adelante se intenta un análisis de los contenidos ideológicos de visiones como éstas).

La estrategia de gobernabilidad no atañe exclusivamente a la órbita política, precisamente porque requiere que el conflicto social se neutralice en su origen, evitando desde allí las crisis del sistema político. Y ello se persigue sobre la base de fragmentar a la sociedad, de impedir sus expresiones colectivas orgánicas: negociaciones salariales empresa por empresa; negociaciones salariales individuales sobre la base de la productividad; tratamiento diferenciado por sectores, dando asistencia social a algunos, mostrándose inflexibles con otros y en algunos casos reprimiendo a los menos neutralizables. Incluso el florecimiento del trabajo informal que disminuye las presiones sociales sobre el Estado, es funcional a la gobernabilidad.<sup>19</sup>

Estas estrategias también tienen límites de viabilidad, pero hay que decir que por los cambios ocurridos en la estructura social de nuestros países a partir de las reconversiones capitalistas, el desempleo, la dificultad de reorganización de fuerzas sociales y políticas que fueron afectadas por el autoritarismo, etcétera, los conflictos no guardan proporción con las necesidades sociales insatisfechas. Sin embargo, los estallidos espontáneos, desesperados (robos de supermercado, distintas formas de violencia y delincuencia) empiezan a ser incontrolables para muchos gobiernos, traduciéndo-

dose en una lógica de inseguridad ciudadana que también disminuye la credibilidad en el sistema.

### ¿De nuevo las fuerzas armadas?

Después de las redemocratizaciones, las fuerzas armadas nunca estuvieron ausentes del escenario político. En Chile el general Pinochet encabezaba a los senadores autodesignados. En donde parecían ausentes, frecuentes declaraciones daban cuenta de su presencia y abonaban el chantaje hacia la población de que traspasándose lo admitido podían amenazar a la democracia. Un chantaje que no dejó de surtir efecto en poblaciones que vivieron crudamente el terror. Pero actualmente, sus presencias más activas parecen recordar que la gobernabilidad es demasiado frágil, que no es posible contener permanentemente el estallido social.

La relación de las fuerzas armadas con el sistema dominante exige un tratamiento exhaustivo y múltiple que excede las posibilidades de este trabajo. Es bien sabido que la alianza de los sectores militares —formalmente subordinados— con la derecha civil, se logró porque ésta garantizaba orden social y desmembramiento ideológico y político de la izquierda. Ello concordaba con los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, predominante en los sectores armados latinoamericanos. Además, las fuerzas armadas se habían desgastado como administradores del poder debido a la escasa legitimidad de sus gestiones dictatoriales. Pero hoy, nuevamente, existen fracciones armadas que observan que la crisis de la dominación conduce a situaciones contrarias a las que fundamentaron la alianza en términos de su subordinación al poder civil.

Existen también algunas otras diferencias ideológicas que podrían explicar los roces con el poder civil. La Doctrina de Seguridad Nacional corresponde ideológicamente a visiones de tipo conservadoras integristas (nacionalismo católico de derecha, subordinación del individuo a la comunidad, etcétera). Perteneciendo al mismo tronco derechista, sin embargo, esta expresión ideológica tiene discrepancias con el neoliberalismo (individualismo, negación de lo nacional como opuesto a lo externo, etcétera).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Véase texto completo en diario *La Jornada*, México, 24 de abril de 1992, p. 49.

<sup>19</sup> Bajo el título “Los niños trabajadores y callejeros detienen el estallido social en México”, el Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia, A.C. (CEMEDIN), anota: “¿Cómo sobreviven estos pobres y por qué no se producen desórdenes multitudinarios con saqueo de tiendas y alimentos?, se preguntan muchos. La respuesta ya la dio el Presidente de CANACINTRA y el CEMEDIN la comparte y amplía: los niños escolares se transforman en niños trabajadores, equilibran la economía y retardan un estallido social”. Véase la *Página de la Infancia*, diario *La Jornada*, México, 30 de abril de 1992, p. 13.

<sup>20</sup> Así, por ejemplo, la oficialidad uruguaya cuestiona las estrategias de integración al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en la medida que impliquen un menor control sobre el ámbito interno (influencia de medios de comunicación de otros países, eliminación de controles fronterizos, etcétera). Discrepancias más generales con los neoliberales las expresan los citados oficiales “carapintadas” desde la prisión:

“Es inconcebible que a pesar de conocer el mundo la crítica situación que sufre Perú, resultado de la aplicación anticristiana de los ajustes del imperialismo internacional del dinero, sumado al terrorismo, al narcotráfico, el cólera y la corrupción... No se comprenda que estas circunstancias, irreversiblemente llevan a todo el subcontinente a caer en actitudes similares a las asumidas en Perú o Venezuela. Consideramos legítimas las resoluciones tomadas por el presidente Fujimori,

Estas discrepancias son de carácter secundario cuando los gobiernos civiles garantizan el orden interno. De lo contrario, pueden emerger como contradicciones. Esto no debe sorprender, lo que sí sorprende es la rapidez con que decantaron algunos procesos.

Otro aspecto importante para interpretar la creciente presencia militar es que, sus tropas, como funcionarios públicos que son, resienten las medidas neoliberales de reducción del gasto fiscal, los recortes presupuestales que les llegan en términos salariales, manifestándose corporativamente.<sup>21</sup>

Después de muchos años de haber sido un factor central en la coerción social, sobredimensionados como fuerzas y con un porcentaje elevadísimo del presupuesto nacional,<sup>22</sup> los sectores armados constituyen un grupo de presión incomparablemente más fuerte que cualquier otro sector de la sociedad. También lo son en términos empresariales pues mantienen el control de la fabricación de armamentos, una actividad que deja muchas divisas, amén de su vinculación con el narcotráfico.

Todos estos elementos y muchos que no he podido considerar aquí, nos anuncian una presencia militar posiblemente creciente incrementando eventualmente las alternativas autoritarias si el descontrol social sigue en aumento.

### Como balance primario

El panorama latinoamericano hacia el fin del siglo parece alejarse de los cuadros idílicos que buena parte de los científicos sociales pretendieron pintar

al ideologizar sus análisis conforme los dictados de sesudas teorías sobre la democracia "sin adjetivos". Para entender los problemas de la democracia en América Latina se requieren no sólo una perspectiva teórica que vincule el fenómeno democrático a la relación explotación-dominación (economía-política), sino también una capacidad dialéctica para entender las estrategias y las resultantes sociopolíticas reales, donde estructura-coyuntura siguen siendo una unidad metodológica esencial.

Sólo con esas perspectivas pueden llegar a comprenderse tanto las estrategias de gobernabilidad, sus éxitos de mayor o menor permanencia que viabilizan las democracias excluyentes, como sus contradicciones e inestabilidad. El panorama latinoamericano exhibe una combinación compleja de todas ellas, situaciones exitosas de gobernabilidad y situaciones en que ésta entra en crisis. Ninguna por cierto aprehensible sin analizar las correlaciones de fuerzas sociopolíticas concretas en cada país. También es cierto que muchas veces los cambios en las correlaciones de fuerza de parte de los explotados-dominados corresponden más a capacidades defensivas que propositivas, pues tampoco se vislumbran por el momento proyectos alternativos viables en lo económico, social y político a estas democracias excluyentes. Lo cual incorpora numerosas interrogantes en una perspectiva a futuro, pero que no puede obnubilar el análisis de la realidad y menos aún conducirlo a una casuística sin referentes. Sin sorpresas.

junio de 1992.

avaladas por más del 80 por ciento del pueblo peruano y sostenidas por sus fuerzas armadas y de seguridad, en tanto y en cuanto sean FRENOS a las políticas de genocidio y miseria impuestas por los planes usureros de la Banca Internacional y el FMI, y avaladas históricamente por los siniestros personeros del pretendido Nuevo Orden Mundial y las bombas de Sendero Luminoso (...)” (cursivas en el original, véase documento citado).

<sup>21</sup> En Brasil, recientemente, un movimiento encabezado por el militar diputado Balsonaro, y que según especialistas tiene convocatoria sobre el 80 por ciento de los 360 mil efectivos, logró mediante actividades callejeras que el presidente Collor aprobara un aumento salarial del 80 por ciento (contra el 50 por ciento que proponía el gabinete), extensivo a todos los funcionarios públicos, llegando el salario mínimo a 105 dólares. La decisión presidencial se tomó por temor a lo sucedido en Perú y Venezuela. Véase información en *La Jornada*, México, 24 de abril de 1992, p. 46. En Uruguay, los jubilados y pensionados militares y policías suboficiales y de tropa acaban de formar el Movimiento Nacional de Retirados (no vinculados a los oficiales golpistas organizados en Alianza Oriental), reclamando homologación salarial con una retroactividad de 130 por ciento. Véase información en el diario *La República*, Montevideo, ediciones del 29 de febrero de 1992, p. 7 y del 1 de marzo de 1992, p. 8.

<sup>22</sup> Al concluir la dictadura en Uruguay el presupuesto militar ocupaba el 56 por ciento del presupuesto nacional.